

LA SAGA-FUGA DE GARCIA VALDES

Ml hermano comenzó a fumar en la cárcel..., todo lo gastaba en comprar droga. Los precios son bastante altos dentro de la prisión", declaraba a "El Imparcial" la hermana de Juan Lucas Gómez. Era este un joven de dieciocho años, al parecer iniciado en las prácticas homosexuales dentro de la cárcel de Carabanchel. Apareció apuñalado en su celda. También los reclusos Manuel Alonso Vila y Victoriano Sayanero Rojas, aparecieron con lesiones, consecuencia de un antigua paliza. Se estaba empleando, según ciertas versiones, la "ley del silencio". Lucas Gómez era ordenanza de la séptima galería, enfrentada con la sexta.

"Mal, muy mal", aseguraba Jaime Capmany desde su columna de Informaciones. Capmany ha conseguido situarse como árbitro de la democracia, como ya lo fuera del fascismo. Su reprobación refleja una sintomática forma de pensar de determinados sectores de la opinión pública. La lucha en la séptima galería de Carabanchel, los desórdenes de la cuarta galería de Valencia, la fuga de más presos de la Modelo de Barcelona (cinco, además de los primeros cuarenta y cinco ya huidos), el incendio en la Prisión Provincial de Valencia y el Palacio de Justicia de Logroño, las fugas inacabadas en todos los centros penitenciarios, están llevando a la prensa el pensamiento de que todo va mal, muy mal en las cárceles.

García Valdés permanece impasible asegurando: "La reforma seguirá adelante". Toda la mañana del viernes pasado la dedicó, con una compañía antidisturbios, a registrar Carabanchel. Se hallaron punzones, objetos cortantes, jeringuillas, sierras, cuchillos y cientos de objetos antirreglamentarios.

El sábado se reúne con la prensa y nos decía: "La reforma seguirá adelante, me apoyan el Ministerio de Justicia y la opinión pública". Ambas afirmaciones eran puestas en duda por la prensa del domingo. Trescientos reclusos de Carabanchel serán trasladados. En Valencia hay diez heridos y diez desaparecidos. Las autolesiones de los reclusos han dejado de ser noticia insólita. El alarmismo que actúa sobre las prisiones españolas obliga a preguntarse: ¿Es consciente García Valdés de su papel? Conviene, no obstante, hacer algo de historia.

A media mañana del 22 de marzo una metralleta cosía a balazos en el centro de Madrid a Jesús Miguel Haddad Blanco. Era una metralleta teóricamente desconocida, hasta ahora incógnita. Haddad era director general de Instituciones Penitenciarias y estaba forjando (nunca mejor empleado el término, ya que su apellido, árabe, significa herrero) una reforma penitenciaria. Según declaraba en un artículo póstumo al *Diario de Navarra*, en absoluta profundidad. Estaba tocando peligrosamente la llaga del régimen anterior: las cárceles.

Tras los primeros revuelos sobre el asesinato, se extendió un velo de silencio sobre los hechos. Unas vagas acusaciones al GRAPO, unas detenciones con tiroteos en Pontevedra y, después, el sospechoso silencio (revelador, cuando menos, de ineptitud del Ministerio del Interior). Dos meses más tarde, casi a finales de mayo, Pérez Varela —un columnista de *El Imparcial* que juega un papel de denuncia paralelo al que representó Pedro Rodríguez en *La Colmena del Arriba con Franco*—, afirmaba profundamente:

"Pudiera ocurrir que el asesinato a sangre fría del anterior director general de Prisiones (sic), señor Haddad no fuera obra del GRAPO, como se dijo officiosamente, sino obra de una poderosa red de mafiosos dedicados a la droga". El habitual silencio de Martín Villa (que podría pasar a la historia como un Don Tancredo que aguanta impávido las embestidas democráticas, pertrechado, posiblemente, por su formación totalitaria y seufística) cubre con su manto de laconismo protector el brutal asesinato. Dos datos más:

la viuda de Haddad era amenazada por teléfono, pese a que éste obtenía otro número en el más estricto secreto, media hora después de efectuarse el cambio. Según Pérez Varela —portavoz muy autorizado— en las prisiones existían túneles "tradicionales" por los que, en vez de salir los presos, entraba la droga y la pornografía.

El Ministerio de Justicia, bajo la piadosa advocación de Landelino Lavilla, es, sin lugar a dudas, el más conservador del actual Gabinete. La muerte inesperada de Haddad, que daba un respetable tono socialdemócrata al departa-

mento, planteó un problema de imagen. Carlos Valdés, demócrata independiente, fue una sustitución adecuada. Levantaba la imagen del Ministerio y "recogía la antorcha" del fallecido. Hubo un gran despliegue oficial y oficioso para presentar a García Valdés como el redentor, como el nuevo apóstol que reformaría las cárceles franquistas sin necesidad de llegar a una ruptura.

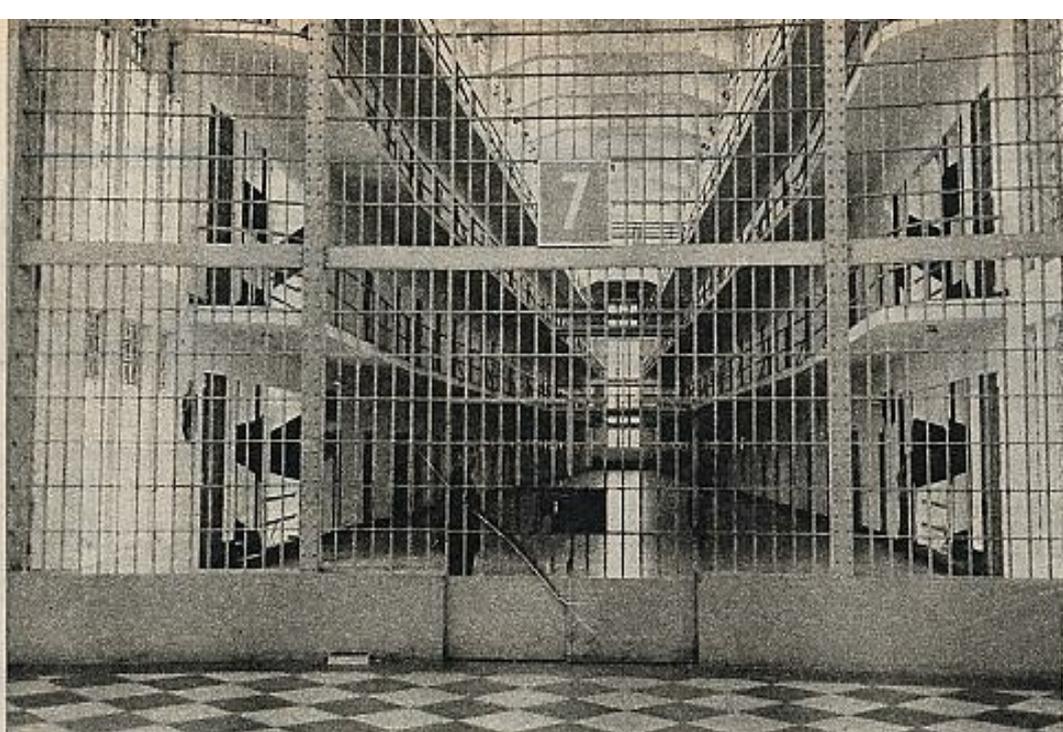
Desde que éste accede a la Dirección General, se han fugado más presos de las cárceles españolas que en toda Europa desde la segunda guerra mundial. Teoría

y práctica. Ser director general —en este régimen de dilatada transición— apenas es algo más que un nombre. Otra cosa, desde luego, es el control real del mundo penitenciario. Las fugas, a simple vista, parecen una provocación. Cuadernos para el diálogo, publicación muy cercana a García Valdés (él formó parte del Consejo fundador) aseguraba la semana pasada: "Es difícil determinar cuánto tiempo seguirá otorgando el Gobierno carta blanca a Carlos García Valdés para que siga en su empeño. No es necesaria mucha intuición para adivinar cómo serán las presiones del Ministerio del Interior y de qué humor estarán el Gobierno y el propio ministro de Justicia, al que también podría arrastrar una crisis política derivada de una fuga masiva de presos".

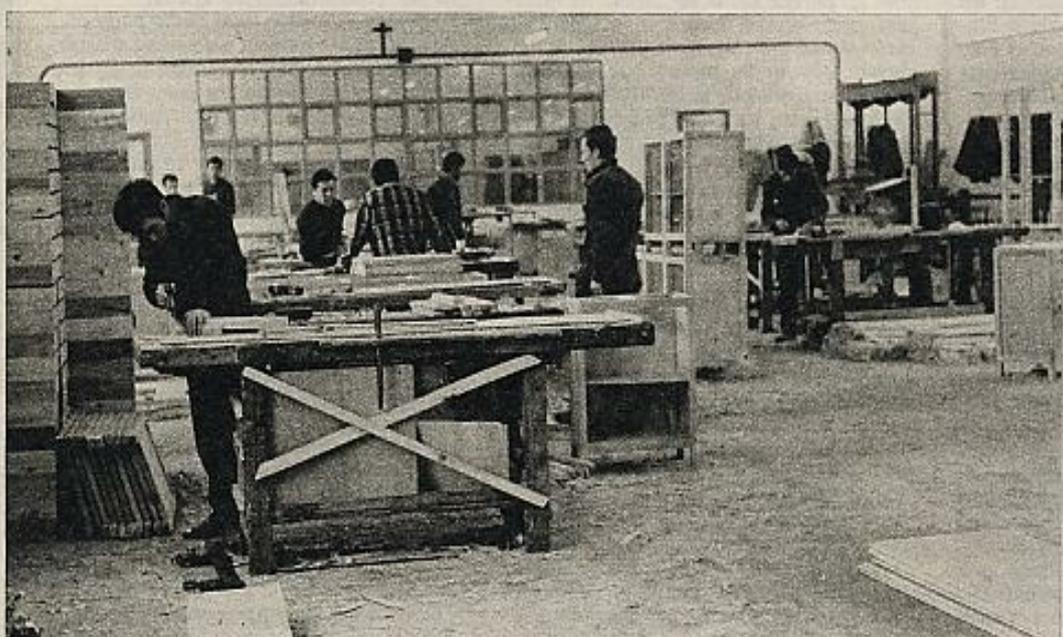
Un cúmulo de preguntas aparecen tras las fugas. ¿Son los funcionarios de prisiones culpables de las mismas? Cuando menos son culpables de negligencia en el desempeño de su función. ¿Se trata de una maniobra para desestabilizar inquietando a la opinión pública? De la Cárcel Modelo de Barcelona, donde se fugaron cuarenta y cinco presos, uno de ellos, Miguel Sánchez, había sido "liberado" por García Valdés de su encierro casi medieval en la quinta galería. Salió limpiamente a la calle en la primera oportunidad. Otro de los fugados es el presunto autor —junto con dos compañeros— del atentado a un policía municipal en Santa Coloma de Gramanet y, posiblemente, del asesinato de Fernando Cortés, alcanzado por los disparos de una escopeta de caza. Se habla de que uno de los autores del segundo atentado es Julián Ugal Cuenca, identificado como "un peligroso" fugado de la Modelo.



Tras la visita del director general de Instituciones Penitenciarias a la Cárcel Modelo de Barcelona, se produjo una fuga de cuarenta y cinco presos, entre ellos Miguel Sánchez, dirigente de la COPEL.



Los enfrentamientos entre galerías han llevado a una guerra interna. En la fotografía, la galería 7 de Carabanchel.



No son sólo ideológicas las reticencias de los funcionarios, hay también problemas económicos. En la fotografía, un taller de la penitenciaría de Ocaña.

Otra pregunta es ¿cómo aceptó García Valdés el reto de la reforma manteniendo un cuerpo de funcionarios franquistas en su origen? ¿Utopía?, ¿Ingenuidad? "García Valdés —nos dice un miembro de la COPEL— se dirige a los presos como si estuviese hablando a sus alumnos". El País situó en un comentario editorial a García Valdés en "la soledad de un director general". Pero García Valdés ya estaba sólo cuando aceptaba inexplicablemente su cargo sin antes imponer condiciones (facilidad para reemplazar funcionarios, amplitud de presupuesto, información fidedigna, etcétera).

Se habla de las motivaciones ideológicas de determinados funcionarios del Cuerpo de Prisiones, oficiales y auxiliares, para no desear la reforma. Se habla menos, por contra, de las motivaciones económicas para desear que una

gestión más democrática (dentro de las limitaciones que el término tiene en los cenáculos del Ministerio de Justicia) rompa los cauces comerciales de las prisiones. Según algunos miembros de la COPEL —que ahora han empezado el régimen de cogestión en algunos de los setenta y siete establecimientos penitenciarios españoles—, los ingresos "adicionales" de ciertos funcionarios se centran, según sus informaciones, en:

a) Negocios de tráfico clandestino, cesión de servicios.

b) Comisiones sobre la comercialización de productos fabricados en las cárceles y penitenciarías que se venden al exterior. Fue célebre, entre otros, un negocio de muebles de Manzanares que, fabricado por los reclusos con material y maquinaria del Estado, se revendaban, mediante un tercero, al

Ministerio de la Vivienda para ajuares de damnificados.

c) Introducción de drogas y pornografía en las prisiones, lo que supondría conexiones mafiosas de reclusos y funcionarios con organizaciones exteriores.

Manuel Merino Camacho, director de la Modelo de Barcelona, ha desmentido la colaboración de los funcionarios a las fugas: "Me resisto a pensar que un profesional pueda caer tan bajo". Sin embargo, no conviene olvidarlo, tres meses antes, funcionarios de Carabanchel mataban a Agustín Rueda y causaban lesiones a otros quince reclusos en un interrogatorio digno de la DINA chilena o de la Gestapo.

La izquierda parlamentaria, por su parte, mantiene un silencio sobre el tema que sólo puede ser equiparado al tradicional de Martín Villa. El error pudiera partir de

que la izquierda no puede enfrentarse —por necesidades de imagen— a todo lo que signifique contrafranquismo. No sólo en el caso de las prisiones, sino en el de la pornografía o las drogas, teme oponerse decididamente —como debería esperarse de su ideología— porque podría ser interpretado por las nuevas corrientes juveniles como detentadores de posiciones reaccionarias —franquistas o estalinistas—, lo que les restaría votos y juventud en las bases. Otra trampa más de la carencia de ruptura.

La COPEL se apoya, dicen, en el PC(r) y, en menos medida, en la CNT. Son lo que los funcionarios denominan "comisarios políticos", refiriéndose a los presos del GRAPO que actuarían como motor ideológico del movimiento de reclusos. Los partidos de izquierda parlamentaria, lógicamente, se alejan del tema. Sin embargo, la presión interior —hay que tener en cuenta que la población reclusa se acerca a las once mil personas— ha trascendido a la calle. El tema es popular y por tanto peligroso. Entendido en todas sus posibles vertientes. De una parte se ensalza al héroe (se significativo el homenaje en Vallecas al El Lute, con Umbral, Felices y Ramoncín), y de otra, más conservadora se desata una campaña de terror en función de las fugas. No hay equilibrio.

Cuando estas líneas entren en máquina, Carlos García Valdés se va a dirigir al Congreso para explicar su situación, su saga-fuga. Se habla de su tenacidad, de su deseo de permanecer. Los funcionarios reunidos clandestinamente en Segovia la pasada semana y los que ahora se reúnen en diversos centros penitenciarios acusan a García Valdés de "establecer el caos en las prisiones". La COPEL, según apreciación de algunos organismos oficiales, tiene un código secreto en el que prima, fundamentalmente, el silencio, privando así a los funcionarios de su red de delatores y confidentes. La situación en el interior de las cárceles se ha invertido en algunos de los casos. Tras las huelgas de hambre, como la actual de Jerez o las autolesiones, el movimiento autogestionario domina la situación. Los funcionarios, en la mayoría de los casos, exageran la crisis o dejan correr el tiempo que, naturalmente, juega a su favor. García Valdés se encastilla cada día en su teorización, en su humanismo. "Los presos —dicen algunos de sus representantes— tienen obligación de escaparse". Los funcionarios también tendrían obligación de no dejarlos escapar. García Valdés —del que ya corren rumores sobre una posible dimisión con carta aclaratoria a la opinión pública— debería sancionarlos. Pero al hacerlo caería en la mecánica anterior, al igual que con la autorización de los cacheos a los presos. Es un círculo vicioso que de momento no se ha roto. ■ F. G.